

Jalisco: una paradoja electoral, 1995-2006



IZTAPALAPA

Agua sobre lajas

*Laura Alarcón Menchaca**

Resumen

En un contexto de alternancia, las elecciones en Jalisco se han caracterizado por la competitividad entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). El ascenso al poder por parte de un gobierno de extracción panista generó una serie de transformaciones en la cultura política de los jaliscienses, así como una circulación de las élites del poder. Resulta paradójico afirmar que el PAN es una alternancia desgastada a pesar del contundente triunfo de sus élites locales en las elecciones de 2006.

Palabras clave: elecciones competitivas, democracia, alternancia, abstencionismo, circulación de élites

Abstract

In a context of political alternance, the elections in Jalisco have been characterized by the competition between the Institutional Revolutionary Party (PRI) and the National Action Party (PAN). The rise to power of the PAN has generated a series of transformations in the political culture of the citizens in Jalisco, as well as more circulation in the power elites. It is paradoxical to affirm that the PAN is a worn out alternative even though the convincing triumph of the local PAN elites in the 2006 elections.

Key words: competitive elections, democracy, alternation, electoral abstention, elite circulation

* Profesora investigadora de El Colegio de Jalisco
laura.alarcon@coljal.edu.mx
lauraalarconmenchaca@
yahoo.com.mx

Introducción

Las elecciones son un elemento sustancial pero no suficiente de un gobierno democrático, ya que sin ellas no puede existir un gobierno de esa naturaleza; le otorgan legitimidad al poder, son el instrumento para escoger a los gobernantes y para que la ciudadanía los califique, le dan vida a la participación política, son el medio que utilizan los partidos políticos para obtener y conservar el poder; en fin, son una herramienta para forjar una sociedad democrática. Además, requieren diversas instancias para lograr sus objetivos, como sistemas de partidos justos y equitativos, medios de comunicación libres y autónomos, separación del gobierno y los partidos, instituciones electorales independientes del gobierno y de los partidos, entre otros. En suma, las elecciones son un mecanismo para controlar y limitar el abuso del poder.

El simple hecho de llevar a cabo elecciones nos permite hablar de democracia política, las condiciones en que éstas se desarrollan hacen posible medir el nivel de democracia en una nación. La complejidad de las sociedades modernas ha propiciado la gestación de sistemas electorales que no siempre responden adecuadamente a las demandas ciudadanas. El gobierno, las instituciones electorales, la participación de los partidos políticos y la ciudadanía se vinculan en un complejo proceso en el cual la equidad y la imparcialidad resultan ser factores medulares para llevarlo a buen término.

Por medio de las elecciones se renueva a los gobernantes, lo que a su vez sirve para legitimarlos, limitar su autoridad y conceder la transferencia pacífica del poder cada cierto periodo establecido por la ley. En ello se ven involucrados los partidos políticos, pues por la actuación de sus miembros la ciudadanía decide sus preferencias en las elecciones, y así “premián” o “castigan” a los partidos que respaldan a determinados candidatos. De esa manera, los candidatos compiten; exponen sus propuestas; promueven sus intereses y al mismo tiempo se dedican a restar importancia a las ofertas de los contrincantes. Las elecciones se convierten en un instrumento para calificar la gestión de los gobernantes mediante el cual

se logra la representación de los gobernados, ya que los ciudadanos no pueden ejercer directamente el poder. Además, han constituido el camino óptimo para el fortalecimiento de la democracia representativa.

Las elecciones se realizan en distintos sistemas políticos, por lo cual toman rasgos específicos. Aunque éstas llegan a efectuarse en gobiernos autoritarios y totalitarios, no representan la naturaleza misma de las elecciones, que son la fuente legal de donde emana el poder. En ese tipo de regímenes, ellas ratifican sin más la voluntad del gobernante para, posiblemente, buscar la legitimación de su poder.

Las elecciones “libres y competitivas” son aceptadas como el símbolo de la democracia pluralista; sin embargo, algunos pensadores como Gaetano Mosca son escépticos en cuanto a este carácter. Para este autor, cualquier gobierno está regido por una minoría organizada a la cual llamó *clase política*. Ésta forma la clase gobernante que es menos numerosa, desempeña las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que de él emanan; en cambio, los gobernados son dirigidos y regulados por los gobernantes, lo cual no implica necesariamente subordinación. Su idea de que el poder siempre pertenece a una minoría no significa brutal sometimiento, por lo que Mosca pone de relieve las técnicas del consenso. Además considera que si los gobernados destituyen a los gobernantes, quienes después gobiernen forman de nuevo una clase política reducida, que vuelve a desempeñar el oficio de dicha clase (Mosca, 1984). En este sentido, las elecciones cumplen un papel central para que la clase política pueda ser dirigida por el mandato de las mayorías, como un mecanismo mediante el cual aquella se renueva y se convierta en depositaria de las consignas de los electores.

Para que las elecciones cumplan cabalmente con su finalidad, se requiere que exista un padrón electoral confiable, credencialización, autoridades electorales imparciales, vigilancia del proceso electoral, información oportuna sobre el resultado de la elección, un órgano calificador imparcial, y tipificación y penalización de los delitos electorales (Crespo, 1995: 29-34). Sin embargo, es importante añadir que para que las elecciones sean equitativas, todos los contendientes deben tener iguales oportunidades para utilizar los medios de comunicación, además, los gobernantes no deben interferir ni velada ni abiertamente en el proceso electoral.

Cabe resaltar que el voto también es un instrumento del cual se valen los electores para castigar a un candidato, a un partido o a un gobierno, o para ejercer presión con el fin de lograr determinados objetivos; pero asimismo se utiliza como un mecanismo coercitivo por parte de los gobiernos o de las corporaciones. Todos los partidos políticos tienen el llamado *voto duro*, que es aquel con el que cuenta un partido sin importar el candidato ni las circunstancias; representa

una “fidelidad” ciega por la pertenencia al partido, por tradición o por una simpatía “ancestral”. En cambio, el *voto flotante* es aquel que obtiene el partido por las cualidades del candidato, por castigar al contrincante, por un favor inmediato, y por otros motivos circunstanciales. En realidad, el elector que emite este tipo de voto es el que marca la diferencia. De allí que los partidos o los candidatos utilicen distintas herramientas o artimañas para convencer al electorado que son mejores que los contrarios. Todo ello conforma los elementos reales de una contienda electoral al margen de los factores formales plasmados por la legislación.

El estudio de alguna elección en concreto debe contextualizarse, puesto que las condiciones del sistema político así como el momento histórico en el que se desarrollan constituyen un punto central de análisis. Además hay que considerar las diferencias entre los procesos nacionales y los locales, los cuales cumplen con especificaciones distintas y, sobre todo, hay que revisar las condiciones propias de cada estado, que son aquellas que permiten examinar las expectativas de los ciudadanos.

La experiencia de Jalisco con el PAN

Hablar de elecciones en Jalisco en un escenario de alternancia refleja un cambio en la cultura política; las modificaciones en el sistema electoral mexicano la posibilitaron en los estados y después en el plano nacional. Sin embargo, los cambios ya son insuficientes para responder a las demandas ciudadanas actuales. Jalisco tiene un lugar especial en el espectro nacional, ya que es una entidad con márgenes considerables de participación electoral y con una fuerte presencia del Partido Acción Nacional (PAN), sobre todo en los centros urbanos y en regiones como los Altos de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara. No es despreciable la posición que conserva el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, no obstante el lugar de una tercera fuerza política es un tanto endeble. De este modo, las elecciones en Jalisco, en un contexto de alternancia, revisten gran trascendencia para el estado y para el país.

Las elecciones federales de 1994 confirmaron el triunfo del candidato del partido hegemónico, el PRI. Sin embargo, Jalisco aumentó considerablemente sus votos en favor del candidato del PAN a la Presidencia de la República. Ello benefició de manera sustancial al candidato de este partido al gobierno de Jalisco en las elecciones locales que se celebraron en febrero de 1995. De tal forma, Alberto Cárdenas Jiménez logró el triunfo convirtiéndose en el primer gobernador de extracción panista en el estado. Con ello se originó una circulación de las élites:

una nueva clase política entusiasta pero novata, que aludía a la urgencia de los cambios. Su discurso reflejaba que los males de la entidad tenían su causa en el pasado priísta y que con el presente gobierno las cosas cambiarían de modo sustancial. La nueva clase política estaba conformada en su mayoría por panistas del grupo identificado como “neopanista”¹ y por representantes de algún grupo de la sociedad. Algunos de los primeros consideraban que debía hacerse tabla rasa para acabar la corrupción y el corporativismo, pero pronto se dieron cuenta de que romper las redes entrelazadas bajo el telón del poder llevaría mucho más tiempo. Las nuevas caras de la élite política querían darle otro rostro a la política.

Las redes entretejidas en el PRI buscaban echar mano de ese corporativismo para frenar los cambios propuestos por el nuevo gobierno, el cual rápidamente entendió que los vínculos eran tan fuertes y sólidos que las transformaciones no podían darse de manera automática. Entonces, la nueva clase política se dividió, algunos proponían cambios paulatinos y otros transformaciones más radicales. Además, los trabajadores del sector público se resistían a ser controlados por las élites recién llegadas, pero, la percepción de algunos fue cambiando y en varios sectores fue diluyéndose el rechazo a la nueva clase dirigente.

Las propuestas fundamentales de la plataforma política del PAN 1995-2001 iban en el sentido de hacer valer un Estado democrático de derecho, propiciar un desarrollo sustentable del estado, dar a los municipios fuera de la zona metropolitana un mayor impulso sin descuidar la atención a los problemas metropolitanos, fomentar la educación y la cultura como una prioridad, y mejorar la calidad de vida de los jaliscienses. Cárdenas ofrecía en campaña proporcionar seguridad pública a los ciudadanos; combatir la corrupción, la pobreza y la marginación; fomentar el empleo y buscar un desarrollo integral del campo y la ciudad.

Su toma de posesión abría un nuevo espectro político, rostros de inexpertos, ilusos, con la honradez como su gran bandera de cambio. Transcurrió poco tiempo para que las “novatadas” fueran conocidas por los ciudadanos, pero también aceptadas con cierto humor por parte del gobernador. Su fortaleza era la legitimidad de su mandato, y su debilidad la gran expectativa de una ciudadanía cansada del clientelismo y del autoritarismo, todo ello acrecentado por la crisis económica. Los nuevos gobernantes panistas demostraban que la alternancia era posible y que podía transitarse sin muchos aspavientos a un proceso democrático.

¹ Este término, así como el de tradicionalista, requiere una investigación sustentada en el entretejido de redes, cómo se construyen, cómo se afianzan y cómo se relacionan.

Legalistas en extremo se muestran ineficaces, torpes, en materia de procuración de justicia. Anteponen la eficiencia administrativa a la política. Muestran inexperiencia, pero aprenden pronto. Emprenden cambios de fondo en el aparato de gobierno, que son poco visibles en el exterior. Innovan formas y se dan frentazos. Buscan la excelencia y denotan escasa sensibilidad social (Ortiz Pinchetti, 1996: 24).

El gobierno de Cárdenas consideraba que debía hacerse una reforma política que se adecuara a los tiempos de Jalisco; con ello el PAN se comprometió a impulsar una reforma política integral. El gobierno entrante buscaba una reforma que fuera más allá del ámbito meramente electoral, para lo cual Cárdenas convocó a la formación de la Comisión Ejecutiva para la Reforma Política del Estado, pero lo hizo excluyendo a los partidos políticos, ya que fue lanzada junto con los poderes Legislativo, Judicial y los presidentes municipales. El gobierno presumía no tener un borrador previo, con la intención de que los distintos sectores de la sociedad participaran. La intención era real, no obstante, como señala María Marván Laborde (2001: 150), “la falta de proyecto inicial imposibilitó que dicho partido tuviera una estrategia de negociación que le permitiera diferenciar lo esencial de lo negociable”.

La premura del tiempo para sacar una reforma electoral que normara las elecciones intermedias originó que la reforma tuviera limitantes que llevaron a una relación aún más compleja entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en la segunda etapa del gobierno de Cárdenas. Se hicieron reformas constitucionales que permitieron la aprobación de figuras como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. La reforma electoral perseguía más que nada garantizar la independencia, la imparcialidad y la objetividad de la organización, así como la calificación de las elecciones. Se buscaba la autonomía del Consejo Electoral del Estado de Jalisco (CEEJ) respecto del Poder Ejecutivo para lograr mayor credibilidad de las elecciones. Se incrementó el número de diputados de 37 a 40; 20 de mayoría relativa y 20 de representación proporcional. “El objetivo de la subcomisión era asegurar que no habría sobrerrepresentación de ningún partido; sin embargo, cuando la iniciativa de ley llegó al Congreso, el PAN sostuvo la necesidad de mantener vigente la cláusula de gobernabilidad para evitar ser rehén de los partidos minoritarios” (Marván Laborde, 2001: 151). Además, se dio una redistribución del estado, pasando de 20 a 19 distritos federales, pero en el proceso estatal conservó 20 distritos. La redistribución obedecía a los cambios migratorios generados en Jalisco, ya que había distritos de gran extensión territorial pero con poca población. La reforma electoral de 1997 terminó fomentando la paralización del Poder Legislativo, que hizo más tirantes las relaciones con el Poder Ejecutivo.

El gobierno de Cárdenas promovió una reforma al Poder Judicial pese a la oposición de redes entretrejidas por gobiernos priístas: un programa de regionalización que le permitió recomponer la estructura en el estado y fortalecer vínculos con aquellos municipios en los que el PAN no tenía una presencia consolidada. Ésa fue una forma de combatir a la pobreza.

La descentralización político-administrativa es una apuesta importante del gobierno panista como primer gobierno de la alternancia, pues su vinculación con los ayuntamientos ha sido básica para su triunfo electoral y su política de regionalización, aunada a la distribución del gasto público, ha introducido nuevas proporciones en las cantidades asignadas a los municipios pequeños rurales más pobres. Sin embargo, el PAN gobierna sobre todo a los municipios urbanos más grandes y mejor comunicados –en los cuales no existe una política de combate a la pobreza extrema–, mientras que el PRI obtiene la mayoría de los municipios del estado, lo cual dificulta el éxito del proceso de regionalización emprendido (Preciado Coronado, 2003: 352).

A pesar del esfuerzo del gobierno de Cárdenas por impulsar la economía regional mediante la inversión extranjera, no fue posible detener el crecimiento de la economía informal. El estado continuó siendo uno de los de mayor cantidad de población expulsada a Estados Unidos, con 15% de los emigrantes que México arroja al año y el saldo más negativo siguió siendo la inequitativa distribución del ingreso. “En 1996, el 20% más rico de la sociedad jalisciense se quedó con 50.9% de la riqueza estatal, contra 4.2% que le tocó al 30% más pobre, según la Encuesta de Ingresos y Egresos de Hogares del INEGI” (Martín y Regalado, 2006: 246).

La búsqueda de mecanismos de diálogo fue un camino complicado y, en algunos casos, poco exitoso. Las nuevas autoridades veían en los reclamos de estos grupos, cuando lo hacían como tal, una fuerza que continuaba manipulada y controlada por los priístas, y los consideraban una afrenta a los cambios que querían implantar. Las autoridades daban mejores respuestas a los ciudadanos cuando las demandas las hacían de manera individual; “las mejores relaciones entre dependencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales se dan con aquellos funcionarios que sin ser panistas fueron incorporados al nuevo gobierno. Esto debido a las relaciones que tenían anteriormente estos funcionarios con esta clase de organizaciones” (Alonso y Blanco, 2003: 308).

Uno de los retos más grandes para el gobierno fue la seguridad pública. Varios incidentes ponían al descubierto la corrupción y la ineficacia de la policía y del Poder Judicial. Las redes construidas en este poder tenían raíces muy profundas

de clientelismo y complicidad con el crimen organizado. Recordemos que Guadalajara ha sido una de las ciudades que ha albergado a fuertes cárteles de la droga, que propician mayor corrupción en los cuerpos policiacos. El intento por militarizar a la policía o, más bien, por poner en manos de los militares la seguridad pública, había generado cierta esperanza en algunos sectores ciudadanos en cuanto a que disminuiría la corrupción, pero pronto se diluyó. La corrupción había llegado a las fuerzas armadas y se sumaba a la ineficiencia de los cuerpos policiacos, de la cual fue víctima la sociedad.

A pesar del desencanto en algunos sectores de la población, la espontaneidad, honestidad y trato afable de Cárdenas lo hacían un gobernador con gran popularidad. Jaime Sánchez Susarrey comentaba:

El gobierno de Cárdenas empezó bien. Su gabinete provocó simpatías, porque entre sus integrantes había gente muy prestigiada por honesta. Hay mayor honestidad. Ése es un valor real que hemos ganado. Por lo demás, no se siente gran diferencia con gobiernos anteriores; no es notorio un cambio, hasta ahora (Ortiz Pinchetti, 1996: 28).

El gobierno de la alternancia dejaba varios saldos pendientes, pero también heredaba una serie de transformaciones que cambiaba el espectro político de Jalisco. Algún miembro de un partido opositor llegó a expresar que, de alguna manera, se gestó una forma diferente de interlocución con otros sectores. Ese estilo sencillo, natural, ranchero y torpe en los discursos del gobernador le daba un carisma que la ciudadanía reconocía; se percibía cercano a los ciudadanos. Con todo, las elecciones locales de 1997 y de 2000 reflejaron que el gobierno no sólo se califica por el carisma de quien lo representa, sino por su eficacia y la de su gabinete.

Las elecciones locales de 1997

Las condiciones económicas influyeron en el electorado para cobrarle la factura al partido en el poder. Asimismo, las reformas electorales de 1996 contribuyeron o fueron resultado de los cambios en la cultura política, que se manifestó en transformaciones sustanciales en el comportamiento de las elecciones intermedias. En el proceso local, como generalmente sucede, las elecciones intermedias generaron menor entusiasmo en la población. Al celebrarse en la mitad del trayecto de un gobierno, y sobre todo del primer gobierno de alternancia, se veía

como el primer termómetro con que se medía la evaluación de la ciudadanía. En 1996, se señalaba que Cárdenas Jiménez era el gobernador con mayor popularidad en México, disfrutando de 85% de aceptación a su gestión (Ortiz Pinchetti, 1996: 29). Sin embargo, de acuerdo con el Centro de Estudios de Opinión de la Universidad de Guadalajara, la intención del voto de los jaliscienses fue restándole consenso al PAN.

En las elecciones de 1995 el PAN logró 52.7% mientras el PRI cayó a 37.1%. En enero de 1996 esa distancia se había abierto hasta 40.5 puntos porcentuales. Para agosto de 1996 se fue cerrando hasta que el PAN sólo quedaba con 4.4 [puntos] arriba. En septiembre, la tendencia al acercamiento entre ambos partidos volvió a abrirse. Entonces el PAN se situó 9.3 puntos porcentuales por arriba del PRI [...] En las elecciones federales de julio de 1997 el PAN obtuvo 43.6% y el PRI 34.6%. La distancia entre los dos fue de 9 puntos. En noviembre de ese año el PAN bajó a 40.2%, y el PRI mantuvo 35.8% (la variación fue de 4.4) (Alonso y Blanco, 2003: 319).

La victoria del PAN en 1995 fue acompañada de altos índices de participación, en cambio, en las elecciones de 1997 ésta disminuyó; la abstención en el primer año fue de 28.9%, y en el segundo, de 36.1%. Jalisco ha sido una de las entidades del país en la que sus ciudadanos acuden en mayor número a las urnas, mostrando una participación por encima de la media nacional (Cortés, Guardado 2005: 328). Resulta significativo encontrar la correlación del triunfo del gobierno de alternancia con el incremento de empadronados que ejercieron su derecho al voto; y que, por otro lado, la disminución en la votación en favor del PAN en 1997 fue aparejada con un aumento de la abstención. Aunque los gobiernos optan por minimizar el significado de la abstención, y los ciudadanos normalmente señalan que ésta fue producto de algún incidente o complicación circunstancial, debemos entenderla como una forma de expresar rechazo o indiferencia, o de reprobar la actuación del gobierno. Además, como apunta Cortés Guardado, las elecciones locales convocan a un menor número de electores, ya que existe “una percepción generalizada entre los ciudadanos de que es más importante participar en las segundas [elecciones federales] que en las primeras [elecciones locales], lo que es consecuente con la idea de que el orden federal de gobierno es más importante, o debería serlo, que los otros dos niveles, los gobiernos estatal y municipal” (Cortés, Guardado 2005: 330).

La ciudadanía le cobró la factura al gobierno de la alternancia debido a varios factores: una franca ruptura con sectores ligados al PRI, inseguridad pública, grupos de panistas desvinculados del nuevo gobierno, gran expectativa de la

ciudadanía no satisfecha por el gobierno, crisis económica de la cual los funcionarios jaliscienses desligaban su responsabilidad, y acusaciones de malos manejos y nepotismo del presidente municipal de Zapopan, Daniel Ituarte Reynaud, quien tuvo que abandonar el cargo. Además, las imputaciones de algunos ciudadanos por el radicalismo “mocho” de ciertos funcionarios del ayuntamiento de Guadalajara que querían imponer su moral privada en cuestiones de gobierno.

La selección de candidatos dentro del PAN reflejó su división interna: la posibilidad real de obtener el poder abrió una brecha entre quienes se sentían los artífices de un partido político con una larga trayectoria de lucha incansable y aquellos nuevos panistas relacionados con otras agrupaciones con un sentido más dinámico, empresarial y pragmático. Marván Laborde señala que se manifestaron cuatro grupos de panistas disputándose las candidaturas: el grupo Zapopan, el cual había impulsado la candidatura de Cárdenas, pero que en esta elección fue uno de los perdedores; el grupo de Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán), lugar de origen del gobernador, que logró varias candidaturas, entre ellas la del hermano del gobernador, Eduardo Cárdenas, para presidente municipal de esa ciudad; el tercer grupo, llamado de los tradicionalistas, obtuvo las candidaturas más importantes; y el último,

caracterizado como el grupo tecnócrata del gobierno panista, la mayoría de ellos ligados a escuelas jesuitas (ex alumnos del Instituto de Ciencias y del ITESO) proviene de la iniciativa privada. Algunos miembros de este grupo, como José Levy, secretario de Finanzas, se mostraron interesados por candidaturas que no sólo se les negaron, sino que ni siquiera han conseguido la aceptación al partido (Marván Laborde, 2001: 152).

Cárdenas había tenido enfrentamientos con el grupo Zapopan por sobrepasar sus funciones el secretario de Gobierno, Raúl Octavio Espinoza, por acusaciones serias de corrupción y por su incapacidad para dar respuesta en materia de seguridad; la distancia entre el gobernador y el grupo que lo había impulsado se hizo aún más grande. El segundo grupo, esas élites llegadas de Zapotlán el Grande en torno a la figura del gobernador, “asaltó” la capital del estado. Respecto al grupo de Levy, había fuertes vínculos con Cárdenas ya que una de las fortalezas del gobierno era el manejo de las finanzas del estado. A pesar de ello, los llamados tradicionalistas lograron encumbrarse y tomar el papel que consideraban les correspondía. El trienio anterior habían sido los perdedores y ahora les tocaba capitalizar el triunfo del PAN. Las asperezas internas y las francas divisiones entre estos grupos se evidenciaron en las elecciones:

Como resultado de esta elección el PAN pasó a gobernar en 40 municipios (cuya población total era de 3 969 181 habitantes), el PRI 70 (donde habitaban 1 762 698 habitantes), el PRD 11, el PT 2, y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 1. El PRD volvió a ratificar su triunfo en Cuquío, tratándose entonces del único municipio jalisciense donde el PRD habría de gobernar a lo largo de tres periodos consecutivos. Para 1999, sólo 35 municipios del estado permanecían sin haber experimentado la alternancia política en sus gobiernos locales (Ceja Medina, 2003: 141 y 142).

El PAN perdió 12 municipios que había ganado en las elecciones anteriores, siendo Tonalá uno de los más importantes por pertenecer a la zona metropolitana. La población gobernada por este partido disminuyó a 65.8% (Marván Laborde, 2001: 153). La pérdida de Tonalá se debió posiblemente a la dinámica campaña del priísta Jorge Arana Arana. Guadalajara y Zapopan volvieron a quedar en manos del PAN a pesar del escándalo de corrupción en este último municipio. Quizá la diferencia radicó en que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN exigió al presidente Ituarte abandonar el poder y dejarlo en manos de un sustituto. Esto expresaba que el partido, en ese momento, no estaba dispuesto a solapar actos de corrupción por parte de funcionarios de filiación panista. Algunos ciudadanos se sentían traicionados por el partido que tenía como principal bandera la honestidad. Con todo, Acción Nacional logró el triunfo de su candidato en Zapopan, José Cornelio Ramírez Acuña, y en Guadalajara el presidente electo fue el hermano de éste, Francisco Javier Ramírez Acuña.

La victoria de los hermanos Ramírez Acuña en los municipios más importantes del estado mostraba ahora el triunfo de los tradicionalistas, que habían sido relegados en el trienio anterior. Francisco había sido contrincante de César Coll Carabias en la contienda interna del PAN por la candidatura de Guadalajara para el trienio 1995-1998. Se afirmaba que ahora el triunfo era de los "auténticos" panistas, ya que decían pertenecer al ala tradicional. El ejercicio del poder en ambos municipios reflejaría, según decían sus seguidores, el verdadero modo de ser panista. En el caso de Guadalajara, Francisco Javier Ramírez Acuña buscó deslindarse de cualquier vínculo con el gobierno anterior y evitó la continuidad de programas implementados por la administración. Algunos funcionarios que habían pertenecido a ese gobierno señalaban con cierta añoranza el fin de políticas públicas que habían logrado cambios sustanciales en el municipio. En el caso de Zapopan, José Cornelio Ramírez Acuña, a pesar de que se acercó más a la ciudadanía y realizó una gran cantidad de obras sociales, vivió un fuerte enfrentamiento con regidores del PRI y terminó su administración en medio de acusaciones de actos de corrupción por compras inexplicables y desvío de fondos (Foust, Rodríguez y Coutiño, 2006: 194).

En cuanto al Poder Legislativo, el retroceso para el PAN fue considerable, pues de las 24 curules que tenía en 1995, de 37 que eran en total, en esta votación obtiene nueve diputaciones de mayoría y 11 de representación proporcional. El Congreso quedó configurado de manera que se complicaron aún más las relaciones con el Poder Ejecutivo: 20 diputados para el PAN, 17 para el PRI (11 de mayoría relativa y seis de representación proporcional), dos para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y uno para el PVEM. Los votos que perdió el PAN se transfirieron al PRD y al PVEM o fueron los votos ganados por el abstencionismo (Marván Laborde, 2001: 153). La “cláusula de gobernabilidad” de la ley electoral permitió que el partido que alcanzó el primer lugar en la votación tuviera una sobrerrepresentación de 9%, lo que le ayudó al PAN a lograr las 20 diputaciones. A pesar de que el asunto llegó al Tribunal Federal Electoral, el PRI no consiguió que la decisión se revirtiera. Es interesante observar que los distritos de mayoría ganados por el PAN se encuentran en la zona metropolitana de Guadalajara (Zapopan y Guadalajara), así como los dos distritos de los Altos de Jalisco y el distrito 15 correspondiente al municipio de La Barca. El PRI se reafirmó en Tonalá y Tlaquepaque, en las zonas rurales del norte y del sur, y en distritos del centro costero (Florido, 2001: 12). La composición del Congreso complicó todavía más el ejercicio del poder; aunque los panistas tenían la mayoría, requerían el apoyo de otra fuerza política para sacar adelante alguna reforma constitucional. Las alianzas del PRI, PRD y PVEM en contra del PAN acentuaron el enfrentamiento entre los grupos. En algún sentido, los pequeños partidos se convirtieron en partidos decisivos, los vínculos de perredistas con priístas permitieron ciertas alianzas, y éstos a su vez negociaban con la diputada del PVEM.

Los panistas buscaban un culpable externo de su descenso en las preferencias electorales, aunque los responsables eran ellos por las promesas incumplidas, por contradecir sus principios y por las pugnas internas. Ellos señalaban que eran víctimas de una campaña de desprestigio por parte de los priístas; se eximían de responsabilidad insistiendo en que los males de Jalisco se habían gestado con el priísmo y que no podían erradicarse en escasos tres años; en cambio, los priístas aseguraban que los problemas del estado tenían su origen en el nuevo gobierno torpe, novato e incapaz de crear vínculos sólidos con la ciudadanía. No obstante, amplios sectores de la población aprobaban la gestión de la alternancia.

Elecciones en el 2000: la tendencia a la baja continúa

Las campañas políticas para los comicios federales en el 2000 dejaron a la población con cierto hartazgo por haber sido largas, tediosas y con fuertes enfrentamientos

entre los aspirantes. El candidato del PAN, Vicente Fox Quesada, se convirtió en el candidato de la Alianza por el Cambio al unirse con el PVEM, y buscó el voto útil para sacar al PRI de los Pinos. Fox, ante el asombro de priístas y de los mismos panistas, triunfó en las elecciones, dando lugar al primer gobierno de alternancia en el nivel federal.

La participación de los jaliscienses en las elecciones federales en el 2000 fue de 63.97%,² es decir, fue mayor que la de 1997, pero descendió considerablemente con relación a la de 1994 (77.8%), lo que significa una diferencia de 13.9 puntos porcentuales. El gobernador de Jalisco se quejaba de que simpatizantes o miembros del PRI coaccionaban el voto advirtiendo en algunos municipios que los beneficios del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresá) se acabarían si no votaban por ese partido. Los electores jaliscienses favorecieron a la Alianza por el Cambio: “en Jalisco, la distancia entre Alianza por el Cambio y el PRI fue de las más altas: 17 puntos en la presidencial, 14 en la de senadores y 13 en la de diputados” (Alonso, 2000: 113 y 114).

La contienda para gobernador se dio entre varios candidatos, siendo los más importantes el del PAN, Francisco Javier Ramírez Acuña, quien era en ese momento presidente municipal de Guadalajara, y el del PRI, Jorge Arana Arana, quien era presidente municipal de Tonalá. Arana tenía buenos resultados como primer edil y se consideraba una de las cartas fuertes del PRI. En elecciones locales celebradas en noviembre de 2000, es decir cuatro meses después de las federales, hubo un descenso en la afluencia de votantes en relación con los años anteriores. Para la elección de gobernador en 1995 había ejercido el voto 71.1% y en el 2000 bajó a 57.7%, y con los diputados ocurrió algo muy similar. En cambio, para municipales varió de 65.8% a 57.1% pasando por una participación de 60.4% en 1997 (Cortés Guardado, 2005: 327-330).

Las preferencias del electorado jalisciense fueron en 1998: 39.9% para el PAN y 30.2% para el PRI; en 1999 42.8% para el PAN, y 39.7% para el PRI; en febrero de 2000, 46% para el PAN y 35% para el PRI. Esto es, que la diferencia entre las dos fuerzas principales fue de 9.7 puntos porcentuales en 1998, 3.1% en 1999 y de 11 puntos porcentuales para febrero de 2000 (Alonso y Blanco, 2003: 320). Los comicios celebrados en noviembre fueron reñidos y controvertidos; la diferencia de votos en la elección para gobernador entre las dos primeras fuerzas fue de 53 641, ya que el PAN obtuvo 1 024 883 votos, el PRI 971 242 y el PRD 118 122, mientras que el Partido del Trabajo (PT) logró 35 359 votos y el PVEM 28 589. Aproximadamente la cantidad de votos que obtuvo el PT fue la que

² En 1988 había votado 62% (Alonso, 2000: 101).

reunieron varios partidos políticos pequeños. El porcentaje de votación válida fue de 46.33% para el PAN, 43.90% para el PRI y 5.34% para el PRD.³ La diferencia entre las dos fuerzas principales fue de 2.43 puntos porcentuales, y Ramírez Acuña obtuvo la constancia de mayoría unos días antes de la toma de posesión después de las impugnaciones presentadas por el PRI. La popularidad de Cárdenas no fue suficiente para acarrearle votos al candidato panista, pero además se manifestaron más abiertamente las pugnas internas dentro del PAN.

De un total de 2 248 716 de votos para diputados de mayoría, 1 020 377 fueron para el PAN, 858 412 para el PRI, 170 311 para el PRD, 45 433 para el PT y 53 325 para el PVEM; los demás se repartieron en diferentes partidos políticos. El Congreso se compuso de 14 diputados de mayoría para el PAN y seis para el PRI. La votación para diputados de representación proporcional fue: 46.31% de la votación válida para el PAN, 38.98 para el PRI, 7.72% para el PRD y 2.42% para el PVEM. De esta manera, el PAN obtuvo 14 diputaciones y el PRI seis, por lo que el Congreso se configuró con 28 diputados del PAN y 12 del PRI, circunstancia que le dio al gobernador mayores posibilidades de lograr sus objetivos, le permitió fortalecer su poder y cerrar vínculos con miembros de su partido.

De los 124 municipios del estado, 50 fueron ganados por el PAN, 64 por el PRI, seis por el PRD, tres por el PVEM y uno por Convergencia Democrática (CD) con 12 903 votos. Los municipios de la zona metropolitana que quedaron en manos del PAN fueron Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan; en Tonalá volvió a triunfar el PRI. El PAN también logró éxitos en otros de los municipios más importantes: Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, El Salto, Tepatitlán, Zapotlanejo y San Juan de los Lagos; mientras que el PRI venció en Ocotlán y Tlajomulco. El mapa político de Jalisco ya demostraba que la ciudadanía cambiaba sus fidelidades de acuerdo con el desempeño del presidente en funciones.

El gobierno de Francisco Javier Ramírez Acuña

El triunfo de Francisco Javier Ramírez Acuña significaba también el del grupo de los tradicionalistas, a diferencia del sexenio pasado cuando la victoria fue del grupo Zapopan y los neopanistas; ahora se posicionaban los panistas “de viejo cuño”. La elección tan competida y controvertida y el estilo de Ramírez Acuña propiciaron un reacomodo en las fuerzas del PAN en Jalisco.

³ Los datos sobre elecciones que no tienen referencia han sido extraídos de <<http://www.ieej.org.mx/>>.

La personalidad del nuevo gobernador contrastaba con la del anterior (“el gober”), y la ciudadanía así lo ha expresado: en los momentos en que ambos coinciden en un acto público, el gobernador recibe chiflidos de rechazo; en cambio, Cárdenas, como funcionario federal, es aplaudido y vitoreado. La expresión de la ciudadanía en favor “del gober” ha generado la furia de Ramírez Acuña, por lo que ha ordenado a sus subalternos evitar encontrarse con él. A Cárdenas se le ha reconocido por “su simpleza, chabacanería y transparencia”, mientras que, a Ramírez Acuña por su “antipatía, necesidad, tozudez y doblez”. “Este gobernador no tiene chispa, se caracteriza por ser gris, por su autoritarismo y por parecerse más a un gobernante priísta tradicional. No es un gobernador que inspire confianza y simpatía social” (Martín y Regalado, 2006: 250).

Si las condiciones económicas en el estado no habían sido del todo satisfactorias, el gobierno de Ramírez Acuña logró 50% menos de inversión extranjera que el de Cárdenas, a pesar de su insistencia en promocionar a la entidad en el extranjero por medio de viajes personales y del gabinete. No ha podido ni ha querido justificar en números los resultados de cada visita a otros países. En junio de 2005, la prensa señalaba que Ramírez Acuña llevaba realizados 32 viajes al extranjero; 182 días de su mandato fuera de México en que ha visitado 21 países, siendo Estados Unidos su principal destino (18 ocasiones), y yendo cinco veces a Europa. Es el gobernador que más ha viajado en la historia de Jalisco.⁴ El gobernador cínicamente decía que era para beneficio del estado, para promover las inversiones, pero no se preocupaba por comprobar los gastos, no obstante los señalamientos de despilfarro por parte del gobernador y de su gabinete. Esto generó en la ciudadanía apatía y desencanto, por lo que ésta considera a todos los partidos agencias de colocación en donde los funcionarios buscan su propio beneficio utilizando prácticas clientelares. El compadrazgo y las camarillas tienen formas similares a las anteriores, lo único que ha cambiado son los rostros.

En materia de participación social, si se compara con seis años atrás, ha habido un retroceso. Se había aprobado la Ley de Participación Ciudadana, con base en la cual diversos organismos civiles impulsaron la iniciativa de ley contra la violencia intrafamiliar. Ramírez Acuña no estuvo abierto al diálogo, y menos a la crítica responsable. Se enfrentó con grupos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que había logrado el respeto de la ciudadanía con el liderazgo de Guadalupe Morfín Otero. Sin embargo, el gobernador incidió en evitar su reelección para imponer a alguien de bajo perfil.

⁴ *Público*, 20 de junio de 2005.

Ramírez Acuña no se detuvo en reprimir aquellos movimientos de jóvenes que él pensaba dañaban la imagen de la ciudad o iban en contra de las buenas costumbres; y no sólo eso, sino que ignoró las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Uno de los casos más sonados en Jalisco fue la represión a los altermundistas que se presentaron en la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea celebrada en Guadalajara en los últimos días de mayo de 2004. Algunos círculos de la sociedad avalaron la actitud del gobierno, pues creían que el hecho de que ciertos grupos, que se decía eran manipulados, interfirieran en la Cumbre deterioraba la imagen de la ciudad. La CEDH presentó un informe en el que afirmaba las graves violaciones a los derechos humanos y solicitaba que se deslindaran responsabilidades de los servidores públicos, aclaró que no avalaba la violencia como manifestación política, pero también insistió en que la autoridad debía asumir que su compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley entrañaba una alta responsabilidad pública para hacer justicia, pero “no para que en el uso de la fuerza se consume la ira, ni mucho menos para permitir que en su nombre se abran las compuertas de la venganza” (Alonso, 2006: 299). El informe señalaba que había habido provocación por parte de manifestantes, pero se dieron testimonios de inocentes que fueron detenidos y, sobre todo participantes y observadores arrestados, que fueron víctimas de represiones y torturas. El gobernador no sólo había avalado la actitud de los cuerpos policíacos sino que los había premiado, y su respuesta ante el informe fue una aceptación parcial en cuanto al apoyo a organismos de derechos humanos y a la capacitación de personal de seguridad pública.

La relación de Ramírez Acuña con los otros poderes se caracterizó por estar situada entre la “negociación” y la imposición, pues algunos lo consideran autoritario, enemigo del diálogo y la crítica. El cambio en la composición del Congreso estatal a partir de 2004, es decir de mayoría priísta, propició transformaciones en sus mecanismos de negociación. Sus alianzas y acuerdos con los otros partidos generaron la inconformidad de panistas que juzgaban se había dado marcha atrás a la independencia de los poderes. Incluso algunos piensan que, a la usanza priísta, Ramírez Acuña controla al partido. Además, ha logrado formar un círculo cerrado de corte clientelar en torno a su persona y ha favorecido los intereses de unos cuantos. Algunos consideran que ha resultado ser un buen priísta, ya que, con el asombro de sus correligionarios, emitió una serie de halagos a los antiguos gobernadores priístas en su cuarto informe de gobierno y “se olvidó” de mencionar a su antecesor.

Una de las fuertes acusaciones por parte de organizaciones civiles, partidos políticos y de la ciudadanía en general ha sido el considerable aumento de los

salarios de los altos funcionarios públicos y el otorgamiento de bonos y compensaciones. Esta denuncia se hizo desde el primer gobierno de la alternancia, aunque se comentaba que había quitado las compensaciones y que ya en esos momentos se transparentaban los recursos a los funcionarios. Los priístas criticaban severamente la medida pero los panistas decían que era una forma de evitar la corrupción.

Sin embargo, no se había llegado a los extremos que ha alcanzado durante la administración de Ramírez Acuña.⁵ Las evidencias de corrupción y mal uso de los recursos públicos brota por todos lados. Secretarios del gobierno del estado, diputados, presidentes municipales y regidores de todos los partidos e integrantes del Poder Judicial, todos, han recibido grandes cantidades de dinero extra, más allá de los salarios legalmente establecidos, de por sí muy altos en comparación con los ingresos de la mayoría de los jaliscienses y mexicanos (Martín y Regalado, 2006: 258) .

La lucha contra la corrupción⁶ ha sido una de las banderas políticas de los panistas que, en muchos casos, se ha quedado como una propuesta de gobierno, puesto que las acusaciones de corrupción, abuso de autoridad y tráfico de influencias no han pasado a ser parte del pasado. Transparencia Internacional señala que el índice de corrupción en México en 2001 fue de 10.6 (la media nacional), y Jalisco ocupó el lugar 28 con un índice de 11.6, es decir un punto arriba de la media nacional; en 2003, la media nacional fue de 8.5 y Jalisco tuvo 6.5, o sea, dos puntos por abajo de la media y se situó en el número 20; y en 2005 la media fue de 10.1 y Jalisco obtuvo 7.2, lo cual muestra que, en este último año hubo mayor distancia –de casi tres puntos– entre la media nacional y el índice de Jalisco, instalándose en la posición 16 respecto al resto de la República.

Así, los saldos pendientes se multiplican y los gobiernos panistas no responden a muchas de sus promesas de campaña. La clase política señala con frecuencia que no se han podido lograr muchas propuestas de campaña por la falta de cooperación de las distintas fuerzas políticas para llevar a cabo una reforma estructural. Esto es parte del problema, pero no debemos olvidar que los actos de corrupción, prepotencia, ineficacia, y las pugnas entre la nueva clase política y su relación con el partido político, han deteriorado aún más la imagen de los partidos, de los gobiernos, de los políticos y de los funcionarios, en pocas palabras, de la

⁵ Martín y Regalado (2006: 258) señalan que “resultó muy escandaloso saber que el gobernador Ramírez Acuña tiene un salario mensual mayor al del primer ministro británico, Tony Blair”.

⁶ Estos datos fueron obtenidos de “Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno” estudio realizado entre noviembre de 2005 y febrero de 2006 por Transparencia Mexicana, Capítulo nacional de Transparencia Internacional.

política en general. La sociedad demuestra indiferencia y sobre todo hartazgo de vivir entre campañas políticas que parecen interminables, plagadas de descrédito hacia sus contrincantes y carentes de auténticas propuestas que velen por el bien común.

Elecciones de 2003

Este proceso electoral intermedio de Jalisco tuvo menor afluencia de votantes que las elecciones para gobernador y sobre todo para presidente de la República: tomó parte el 53.4%, es decir, hubo un abstencionismo de 46.6%. En cuanto a la participación disminuyó en 3.7 puntos porcentuales con relación a tres años atrás; la abstención aumentó en ese mismo lapso 3.8 puntos porcentuales. La reducción de la afluencia no fue tan contrastada como había sido entre las elecciones de 1995 y 1997, debido a que en 1995 se había incrementado considerablemente la concurrencia de votantes.

El proceso electoral de 2003 fue todavía más competido que el trienio anterior. Aunque el PAN obtuvo el triunfo otra vez en 50 municipios, esto es, en igual número al del trienio pasado, recibió menos votos que el PRI, lo cual logró 937 569 votos y el PAN 902 175, lo que significa 40.4% de los votos para el PRI y 38.9% para el PAN. La votación en favor del PRD disminuyó, pues en el 2000 había ganado en seis municipios y ahora sólo lo hizo en cinco (Sayula, Teuchitlán, Tomatlán, Tuscacuesco y Zapoltitlic), con un porcentaje de 7.06% de los votos. El ascenso del PVEM en las preferencias electorales de los jaliscienses resultó significativo, ya que consiguió 6.85% de los votos, es decir, logró un ascenso considerable puesto que tres años atrás sólo había tenido 2.43%. A diferencia de 2000, cuando había triunfado únicamente en tres municipios, ahora gana en ocho: Ahualulco de Mercado, Ameca, Jamay (lugar de donde es originario Ramírez Acuña), Jocotepec, Mascota, San Juan de los Lagos, San Miguel el Alto y Villa Corona. Esto resultaba aún más trascendente por los conflictos internos del PVEM en el ámbito nacional y los escándalos de corrupción y nepotismo en torno a él.

De los municipios de la zona metropolitana, sólo Guadalajara quedó en manos del PAN, mientras que el PRI conservó Tonalá y obtuvo Tlaquepaque y Zapopan. La derrota en este último significaba un gran revés para el panismo. No obstante la diferencia entre las dos fuerzas políticas más importantes fue de 3 149 votos, el PAN tuvo 140 627 y el PRI 143 776, una pérdida importante para el PAN por las características del municipio. En el caso de Tlaquepaque, la diferencia fue de menos de 1 000 votos, obteniendo el PAN 12 350 y el PRI 13 022; y en Tonalá

la distancia fue de 6 000 votos pero con un electorado menor: el PRI obtuvo 42 215 sufragios y el PAN 36 480. Los municipios de Arandas y La Barca pasaron al poder del PAN, logró conservar Lagos de Moreno y El Salto, recuperó Tlajomulco después de varios escándalos de corrupción referentes al PRI. Con ello, la ciudadanía ha percibido que el color del partido gobernante no es garantía para evitar la corrupción y el clientelismo.

Las elecciones de diputados de mayoría relativa permitieron la composición del Congreso de la siguiente manera: el PAN obtuvo seis diputaciones de mayoría relativa, en cambio el PRI logró 14. En relación con las elecciones de 2000, las cifras se invirtieron, ya que el PAN había tenido 14 diputaciones y el PRI seis. En cuanto a los diputados de representación proporcional, el PAN consiguió 11, el PRI cinco, el PRD dos y el PVEM dos. En total, el Congreso estatal se conformó con 19 diputados del PRI, 17 del PAN, dos del PRD y dos del PVEM. La ciudadanía demostraba su inconformidad con el gobierno de Ramírez Acuña.

Elecciones de 2006 ¿Fortaleza o debilidad de la alternancia?

Las elecciones de 2006 tienen una importancia inusitada para Jalisco porque se realizaron el mismo día las elecciones federales y las estatales. Los principales partidos políticos en la entidad nombraron a sus candidatos al gobierno del estado: el PAN lo eligió entre varios contendientes mediante una votación por parte de los miembros del partido, logrando el triunfo Emilio González Márquez, presidente municipal (con licencia) de Guadalajara. Los contrincantes lo acusaron de haber sido beneficiado por el gobernador y de haber usado la maquinaria del gobierno para apoyarlo en alianza con la dirigencia estatal del partido. Además, hubo un fuerte reclamo de haber utilizado recursos públicos y la nómina del ayuntamiento que encabezaba. El candidato del PRI al gobierno fue Arturo Zamora, presidente municipal (con licencia) de Zapopan, quien logró la candidatura con la oposición de algunos priístas que culpaban a Ramírez Acuña de haber intervenido en la elección. Por otro lado, el candidato de la Alianza por el Bien de Todos, Enrique Ibarra Pedroza, había tenido una larga militancia priísta e inconforme con las prácticas corruptas y clientelares abandonó el partido. Asimismo hubo otros aspirantes de partidos con poca fuerza en Jalisco.

Las campañas por la Presidencia de la República ya habían contaminado el ambiente político; su larga duración y el empleo de instrumentos para desacreditar a los contrincantes propiciaban perder de vista las propuestas concretas. Las campañas en Jalisco siguieron la misma tónica, es decir, estuvieron dedicadas a

destruir al adversario, alegando guerra sucia por parte del contrario. Los pronósticos iban encaminados a que el triunfo en las elecciones del 2 de julio de 2006 lo tendría el abstencionismo, al cual le temían los funcionarios públicos y los partidos políticos. La herramienta que utilizaron para evitarlo fue convocar al voto, pero sobre todo llamar la atención del electorado mediante el descrédito a las labores realizadas por los opositores y a su historia personal.

La sorpresa sobre los resultados electorales en Jalisco fue notoria en gobernantes y gobernados pero con mayor razón en los partidos políticos y en los candidatos, ya que aumentó la afluencia de votantes en relación con las dos últimas elecciones locales. Las encuestas planteaban unos comicios muy competidos; unas empresas daban el triunfo al tricolor, otras al partido azul, pero coincidían en que el margen iba a ser reducido. La primera sorpresa fue que 60.94% de los electores ejerció su voto, es decir, tres puntos arriba de lo ejercido el 2000 y casi siete puntos porcentuales respecto al 2003. El triunfo recayó en González Márquez, quien obtuvo 1 296 745 votos contra 1 187 822 en favor de Zamora; en tercer lugar estuvo Ibarra Pedroza con 224 590 sufragios. La contienda fue más enconada entre los dos primeros logrando mayor margen entre ellos en comparación con seis años atrás; el PAN consiguió 45.19% de los votos, casi el mismo porcentaje que en la elección de gobernador previa, en cambio Zamora logró 41.40% de los votos, o sea, un poco menos de dos puntos porcentuales respecto al año 2000. Uno de los cambios en relación con seis años atrás fue el aumento de votos en favor de la Coalición por el Bien de Todos, que alcanzó un mayor porcentaje (7.83%) que hace seis años (5.25%). Los dos puntos porcentuales que perdió el PRI se transfirieron a la Coalición.

No menor fue el asombro con los resultados de los municipios. El PAN obtuvo 63 municipios con 42.90% de las preferencias electorales, el PRI 46 con el 36.32%, la Coalición por el Bien de Todos (PRD-PT) diez con 10.05%, el PVEM cinco con 3.30%. En cuanto a los municipios de la zona metropolitana, el PAN triunfó en los cuatro: Guadalajara con 387 617 votos, casi 87 000 más que los 300 966 del PRI; el PRD-PT recibieron 64 508, el Partido Nueva Alianza (PNA) 26 360, y el PVEM 14 073. En estas elecciones, la victoria del PAN fue más contundente que en 2003 ya que la diferencia entre él y el Revolucionario Institucional fue de aproximadamente 8 000 votos, y ahora fue de casi 87 000. Zapopan fue recuperado por el blanquiazul con 219 327 sufragios, contra los 177 115 que alcanzó el PRI, los 32 728 del PRD-PT, los 13 304 del PNA y los 7 493 del PVEM. Las dos principales fuerzas se separaron por 42 212 votos, en contraste con 2003 que lo hicieron por 3 149 votos con el triunfo del PRI. Tlaquepaque regresó al poder del PAN con una distancia de 16 614 votos respecto de su competidor más cercano (obtuvo

90 091 votos); el PRI recibió 73 477 sufragios, la Coalición por el Bien de Todos 17 342 y el Partido Nueva Alianza 6 944. Después de varios trienios, Tonalá volvió a manos de Acción Nacional con 54 251 votos contra 49 768 del Revolucionario Institucional, 10 100 del PRD-PT y 5 385 del PNA, alejado de su contrincante más próximo por 4 483 votos. En cuanto al resto de los municipios ganados por el PAN resaltan por su número de habitantes y trascendencia Arandas, Atotonilco el Alto, Lagos de Moreno, Ocotlán, San Juan de los Lagos, Tepatitlán, Tequila, Tlajomulco de Zúñiga, Zapotlán el Grande y Zapotlanejo.

De los 46 municipios en que venció el PRI sobresalen Puerto Vallarta, en donde captó 33 034 votos en contraste con los 28 334 del PAN (lo que representa 4 700 votos más), y El Salto, en el que ganó por 6 487, obteniendo 17 552 votos y el PAN 11 065. También triunfó en Chapala, Encarnación de Díaz y La Barca, entre otros. La Coalición por el Bien de Todos (PRD-PT) se quedó con diez municipios: Acatlán de Juárez, Casimiro Castillo, Cocula, La Manzanilla de la Paz, Ojuelos Poncitlán, San Martín Hidalgo, San Sebastián del Oeste, Tala y Tapalpa, destacando por la cantidad de habitantes Tala y Poncitlán. El PVEM ganó cinco ayuntamientos: Ahualulco del Mercado, La Huerta, Mascota, Sayula y Tuxpan. “En el municipio de Tuxcueca, la elección quedó empatada con 662 votos para cada uno de los candidatos del PAN y PRI, por lo que corresponderá al Congreso del Estado convocar a una elección extraordinaria, siempre y cuando no se presente medio de impugnación”.⁷

La votación para los diputados de mayoría fue sorprendente, pues en ninguna elección el blanquiazul había logrado un éxito de esta magnitud: 19 diputados de los 20 de mayoría; sólo el distrito 19, ubicado al sur del estado, fue para el PRI. En cuanto a los diputados de representación proporcional, dos fueron para el PAN, 12 para el tricolor, cuatro para la Coalición por el Bien de Todos (con el Partido de la Revolución Democrática como fuerza principal) y dos para Nueva Alianza. El PAN recibió el 43.67% de los votos, el PRI 33.17%, el PRD 10.27% y el PNA 4.62%. Con estos resultados, el Congreso del estado quedó configurado para el trienio 2007-2010 con 21 diputados para el PAN, 13 para el PRI, cuatro para el PRD y dos para el PNA.

En suma, el poder en manos del PAN en Jalisco para el trienio 2007-2010 se conforma por el gobernador, 21 diputados de 40 y 63 municipios, contando con los de mayor importancia en el estado; esto es, podemos decir, a la vieja usanza priísta, casi el carro completo. Los resultados contradijeron los pronósticos; no obstante, el PAN en Jalisco es una alternancia desgastada.

⁷ *Boletín Informativo del IEEJ*, Edición Especial, *Elecciones 2006*. Tales comicios extraordinarios se realizaron en 2007, ganándolos el PAN.

Algunas consideraciones finales

La alternancia en Jalisco generó una serie de expectativas en buena parte de su población, ya que era uno de los primeros grandes pasos para la construcción de procesos democratizadores. En 1995, por primera vez en la historia del estado se planteaba la posibilidad real de la alternancia política, el sufragio era respetado y existía la verdadera oportunidad de elegir a los gobernantes. Después de más de 65 años del dominio del Revolucionario Institucional como partido hegemónico, la alternancia cobraba un enorme significado. La circulación de las élites parecía implicar cambios en las prácticas políticas. La ciudadanía demandaba dar al ejercicio del poder otro rostro y acabar con el clientelismo, el autoritarismo, el corporativismo y la corrupción.

El ejercicio del poder puso a prueba los planteamientos del Partido Acción Nacional desde sus orígenes: el respeto a los derechos del hombre, la economía con rostro humano, igualdad de oportunidades para todos, acabar con el control de las organizaciones obreras y campesinas por parte del Estado, terminar con el clientelismo, romper la simbiosis entre el PRI y el gobierno, respetar el sufragio, salvaguardar las libertades de los ciudadanos, fortalecer el municipio como primera instancia de los procesos democratizadores; en fin, crear y vigorizar una opinión pública capaz de decidir su destino.

Respecto a la transformación del estado, las autoridades pronto se dieron cuenta de que los cambios no eran tan sencillos como parecían. Las redes que había tejido durante más de 60 años el partido hegemónico no podían romperse de inmediato; los intereses de grupo, la fidelidad y la "lealtad" tenían raíces muy profundas. Esto complicaba el asunto, ya que tenían que utilizarse herramientas que les permitieran negociar para lograr consensos con los distintos grupos sociales, especialmente con aquellos que mantenían el control de grupos, organizaciones e instituciones. Las nuevas élites no se caracterizaban por sus habilidades en la negociación política, lo que generó crisis en el gabinete, en la relación entre los poderes y, sobre todo, enfrentamientos enconados con grupos que tenían fuertes intereses en la entidad. Algunos consideraban que debía actuarse con firmeza y acabar con los vestigios de los gobiernos anteriores, mientras que otros manifestaban una especial inclinación por lograr consensos con los grupos contrarios para así lograr el bienestar del estado.

Poco tiempo pasó para que el PAN demostrara que era muy diferente ser un partido de "oposición leal" que una oposición real; la obtención del poder puso a prueba los principios que tanto defendía el partido. Se presentaron casos de corrupción y nepotismo que el CEN del PAN no podía aceptar. No obstante, esa

actitud se diluyó conforme los integrantes de los comités del partido fueron involucrándose aún más con la clase política.

La democracia interna había caracterizado a Acción Nacional: seguidores y detractores reconocían que funcionaba de acuerdo con la legalidad, se elegía a los candidatos con procesos democráticos y se debatían las posturas que el partido tomaría en materia política y electoral. Esos procesos han quedado atrás, las componendas entre las facciones otorgan las candidaturas a discreción. Las pugnas y divisiones internas por alcanzar las candidaturas y el reparto del botín han desestabilizado al partido en Jalisco y a la vez han fortalecido a ciertas facciones. La "lealtad" tiene su precio y Acción Nacional lo ha pagado. El PAN se ha convertido en un medio para obtener poder y riqueza; ha pasado a ser un partido "chambista" y las camarillas han ido forjándose en torno al gobernante en turno. La rivalidad de los dos gobernadores panistas de Jalisco ha profundizado los enfrentamientos en el partido.

A pesar de escándalos de corrupción durante el gobierno de Cárdenas, se percibieron cambios positivos, y la gran mayoría de la población no dudaba de la probidad del gobernador, en cambio, en el sexenio de Ramírez Acuña se señaló que muchas prácticas políticas eran un retorno al pasado, y buena parte de los jaliscienses no confiaba en él por considerarlo deshonesto. Su "alianza" con el partido, el favoritismo hacia su grupo cercano, y las prebendas políticas y económicas han convertido a Acción Nacional en Jalisco en una "agencia de colocación". Las acusaciones referentes a los gastos excesivos por parte del gobierno, a las compensaciones y bonos, al favoritismo hacia un grupo y al control de las designaciones de los candidatos por diversas facciones dentro del partido han profundizado el desgaste de Acción Nacional.

Las preferencias electorales hacia el PAN en Jalisco fueron erosionándose a medida que los gobiernos y el partido fueron perdiendo credibilidad por parte de los ciudadanos. La expectativa de unas elecciones poco concurridas e impugnadas se desvaneció, pues en 2006 logró aumentarse la participación política respecto tres años atrás, además de que el triunfo del PAN fue contundente. Al ser las elecciones el instrumento idóneo de calificación de los gobernantes, una lectura rápida de ellas refleja el fortalecimiento de los gobiernos de alternancia. Sin embargo, aunque resulte paradójico, el PAN constituye una alternancia desgastada.

Bibliografía

Alonso, Jorge

- 1995 *El cambio en Jalisco. Las elecciones de 1994 y 1995*, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH)-Universidad de Guadalajara (UdG)/ Consejo Estatal Electoral de Jalisco (CEEJ)/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Occidente (CIESAS), Guadalajara.
- 2000 “Las elecciones federales del 2000, consolidación del panismo”, en *Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad*, núm. 19, CUCSH-UdG, Guadalajara, pp. 95-126.

Alonso, Jorge e Isabel Blanco

- 2003 “Organizaciones de la sociedad civil y gobierno. Una visión regional desde Jalisco”, en Jaime Preciado Coronado et al. (coords.), *Territorios, actores y poder. Regionalismos emergentes en México*, UdG/Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Guadalajara y Mérida, pp. 303-322.
- 2006 “La represión en Guadalajara”, en Jorge Alonso (coord.), *La acuitada coyuntura mexicana*, UdG, Guadalajara, pp. 297-328.

Arana Cervantes, Marcos

- 1996 *La alternancia así nació en Jalisco*, Encino-Comunicación, Guadalajara.

Ceja Martínez, Jorge

- 2003 “Alternancia, recomposición regional y vida municipal”, en Jaime Preciado Coronado et al. (coords.), *Territorios, actores y poder. Regionalismos emergentes en México*, UdG/UADY, Guadalajara y Mérida, pp. 135-162.

Ceja Martínez, Jorge e Ignacio Medina Núñez

- 1998 “Partidos y ciudadanos: la alternancia política municipal en Jalisco”, en *Estudios Jaliscienses*, núm. 33, agosto, El Colegio de Jalisco, Zapopan, pp. 61-75.

Cortés Guardado, Marco Antonio

- 2005 “Abstencionismo, participación cívica y legitimidad institucional en Jalisco”, en Víctor Alejandro Espinoza Valle y Luis Miguel Rionda (coords.), *Después de la alternancia: elecciones y nueva competitividad*, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)/El Colegio de la Frontera Norte/ Sociedad Mexicana de Estudios Electorales/Universidad de Guanajuato, México, pp. 325-350.

Crespo, José Antonio

- 1995 *Elecciones y democracia*, Instituto Federal Electoral (Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática), México.

Florido Alejo, Ángel Lorenzo

- 2001 “Seis años de alternancia en Jalisco. Aportaciones y dificultades para la de-

- mocracia local”, ponencia presentada en el XIII Congreso Internacional de la Latin American Studies Association (LASA), celebrado en Washington, D.C., disponible en <lasa.international.pitt.edu/Lasa2001/FloridaAlejoAngelLorenzo.pdf>.
- Foust, David, Tarcisio Rodríguez y Juan Pablo Coutiño
 2006 “La coyuntura de la zona metropolitana de Guadalajara vista en tres conflictos”, en Jorge Alonso (coord.). *La acuitada coyuntura mexicana*, UdG, Guadalajara, pp. 183-211.
- Gómez López, Alicia
 1997 *Crisis y transición en Jalisco*, CUSCH-UdG, Guadalajara.
- Martín Martín, Rubén y Jorge Regalado Santillán
 2006 “Jalisco 2005: contradicciones y paradojas de la alternancia política y el desarrollo económico”, en Jorge Alonso (coord.). *La acuitada coyuntura mexicana*, UdG, Guadalajara, pp. 237-271.
- Marván Laborde, María
 2001 “Elecciones intermedias: Jalisco 1997”, en Manuel Larrosa Haro (coord.), *Elecciones y partidos políticos en México, 1997*, Centro de Estadística y Documentación Electoral de la UAM-Iztapalapa, México, pp. 149-156.
- Mosca, Gaetano
 1984 *La clase política*, trad. Marcos Lara, selección e introducción Norberto Bobbio, Fondo de Cultura Económica (col. Popular 260), México.
- Ortiz Pinchetti, Francisco
 1996 “Ahí vienen: cómo se vive bajo el gobierno de los panistas en Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco”, en *Proceso*, núm. 1046, 17 de noviembre, México, pp. 22-29.
- Preciado Coronado, Jaime
 2003 “La región ha muerto; ¿viva el regionalismo? El caso de la alternancia política en Jalisco”, en Jaime Preciado Coronado et al. (coords.), *Territorios, actores y poder. Regionalismos emergentes en México*, UdG/UADY, pp. 323-353.